

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **NELSON DE JESÚS PUERTA**, contra la señora **MARÍA ELSY RESTREPO DE TOBÓN**, tramitado bajo el radicado No. **05129-31-03-001-2019-00015-01**.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto, y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través del ejercicio de la presente acción judicial, el demandante pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo por obra o labor, y como consecuencia de ello, se declare la omisión del empleador de vincularlo al sistema de seguridad social integral. Igualmente, pretende que se condene a la demandada, al pago de pensión y salud por el tiempo en que estuvo cesante entre el 07 de marzo de 2016, al 11 de abril de 2018, el pago de salarios por el mismo periodo, derivado de la culpa patronal consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. También solicita que se condene al empleador al pago de la indemnización que se cause por la pérdida funcional, misma que estima entre el 30% al 35% equivale a una indemnización entre \$18'000.000 y \$25'000.000 de pesos, y el pago de la indemnización por perjuicios derivados de la omisión por parte del empleador, que menoscabaron la dignidad e integridad y derechos del trabajador y su familia, perjuicio que estima en \$30'000.000 de pesos.

Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, relata el demandante que entre él y la señora MARÍA ELSY RESTREPO DE TOBÓN, propietaria de “ABARROTES ELSY”, se presentó una relación laboral, en la cual se obligó de manera verbal a

prestar un servicio personal, con una remuneración de \$420.000 pesos, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con fecha de inicio el 05 de febrero de 2016, configurando de esta manera el contrato laboral.

Relata, que no fue afiliado al sistema de salud, por lo que no tuvo cubrimiento de dicho sistema en las condiciones establecidas en la Ley.

Manifiesta que el 07 de marzo de 2016, cuando estaba realizando las labores encargadas por su empleador, sufrió un accidente que le produjo fractura de clavícula y hombro, terminando ese día de manera abrupta la relación contractual.

Dice que, a raíz del accidente, se dirigió a la ESE SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS ANTIOQUIA, pero no pudo ser atendido de manera oportuna, porque no se encontraba afiliado a ninguna ARL, siendo atendido por la EPS el 08 de marzo de 2016, atención que se dio por ser beneficiario en salud de su esposa.

Relata que, durante el tratamiento posterior al accidente laboral, la atención en salud fue realizada por la EPS y no por la ARL, situación que afectó sus derechos como trabajador y el tipo de prestación a la que tenía derecho.

Informa que se puso en contacto con su empleadora para solicitarle el apoyo para el cubrimiento de la contingencia, sin embargo, esta le manifestó que no iba a responder por nada, razón por la cual se vio conminado a presentar acción de tutela en su contra, con el fin de proteger los derechos que le asisten como empleado, misma que fue fallada a su favor.

También indica, que solicitó la calificación de pérdida funcional, y para tal fin, le fue exigido un copago de aproximadamente un millón de pesos, situación que imposibilitó la realización de tal dictamen por falta de recursos.

Finalmente, indica que, durante el tiempo de rehabilitación, quien soportó las obligaciones que debía sobrellevar el empleador, fue su compañera, colocándose en una situación de vulnerabilidad, que generó angustias y padecimientos por la falta de apoyo a él y su familia, pudiéndose reincorporar a la fuerza laboral, tan solo en el mes de abril de 2018.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El juez de primera instancia despachó parcialmente favorable las pretensiones de la demanda, declarando que entre el demandante y la demandada, existió un contrato de trabajo por obra o labor determinada, entre el 15 de febrero y el 7 de marzo de 2016, con una asignación básica de un salario mínimo mensual vigente. En razón de lo anterior, condenó a la accionada a realizar a favor del accionante, el pago de la reserva actuarial que determine la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentre afiliado el demandante o afiliarlo si no lo está, entre el periodo del 15 de febrero y el 7 de marzo de 2016 con base al salario mínimo legal para la fecha. Negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para arribar a dicha decisión, adujo el *a quo*, que la demanda contiene pasajes oscuros de cara a los pedimentos que en ella se hacen, y aunque se declaró probada la excepción de inepta demanda, tales imprecisiones siguieron existiendo porque el despacho no tomó los suficientes medios correctivos para remediarlos.

En virtud de lo anterior, consideró que, haciendo un esfuerzo interpretativo de la demanda, y escrutando las aspiraciones del demandante, concluía que lo pretendido en el proceso, se contraía a dos aspectos puntuales, el primero, que se declare el contrato de obra o labor determinada, y como consecuencia de ello, que se condene a salarios, aportes a pensiones y salud y de otro lado, que se declare la culpa patronal por no haber afiliado al actor a la seguridad social.

En cuanto a la existencia del contrato laboral por obra o labor contratada, consideró que con las pruebas arrimadas al proceso, se lograban demostrar los elementos esenciales del mismo, tales como la prestación personal del servicio, la subordinación y un salario como retribución, sin embargo, no profirió condena respecto de la solicitud de salarios, porque el demandante confesó que la demandada le pagó su salario hasta el momento de finalización del vínculo, y que no podía efectuar condena después del 7 de marzo de 2016, porque con posterioridad a esa fecha ya no había contrato de trabajo.

Respecto del pago de aportes en salud, dijo que la jurisprudencia ha sido clara en indicar que los únicos aportes que hay lugar a reconocer de manera extemporánea, son los aportes en pensiones, excluyendo el pago de cotizaciones a salud y riesgos profesionales, habida cuenta que la sanción para el empleador negligente que no realiza el pago de cotizaciones a la seguridad social, consiste en que de haberse presentado alguna de las contingencias cubiertas por estos, dicho empleador es quien

responde directamente por los costos del tratamiento, inclusive por la pensión si hubiere llegado a causarse.

Frente a la culpa patronal, dijo que el demandante debía demostrar la culpa, sin embargo, nada de eso ocurre en el asunto, porque la culpa patronal según los supuestos fácticos que le dan soporte a esa pretensión, no radican en un hecho u omisión en la ejecución del contrato de trabajo, o en las medidas de trabajo que se debía adoptar para su ejecución, sino en la inobservancia de las obligaciones prestacionales del empleador, asunto que naturalmente no es el contemplado en el art. 216 del CST.

De esta manera, consideró que si bien el hecho de no pagar las prestaciones sociales al empleado supone un reproche que es sancionado por la Ley, su desconocimiento le impone al empleador, asumir la atención de los accidentes de trabajo, los riesgos y las eventuales enfermedades que se causen durante la vigencia del contrato, sin embargo, en este caso el demandante en sus pretensiones no reclamó ningún rubro por las erogaciones derivadas de su accidente laboral, ya que en su lugar, reclamó una indemnización por culpa patronal, misma que no quedó demostrada, pues el supuesto sobre el cual se basa, no es constitutivo de tal sanción indemnizatoria.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

El apoderado del demandante presentó recurso de apelación, señalando que, en virtud de la omisión de la demandada en vincular al demandante a la seguridad social, éste no pudo acceder al sistema de la salud en las condiciones que tiene el afiliado o una persona que está afiliado al seguro de riesgos profesionales, por lo que no tuvo acceso a los montos indeterminados por la evaluación médica, siendo la demandada quien tuvo que sufragar los gastos de toda esa situación.

Aduce, que tampoco se le pudieron generar incapacidades por el sistema, ya que era beneficiario en salud, lo cual no le permitió trabajar durante dos años posteriores al accidente que sufrió.

Indica, que el accionante tuvo una disminución derivada del accidente que debería ser evaluada y la oportunidad de tener una remuneración a favor de él por esa situación, y la demandada no demostró que durante el tiempo que estuvo incapacitado, le hubiera dado remuneración alguna, ya que lo pagado fue solo por el tiempo que trabajó, más no por el tiempo de incapacidad.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado judicial del demandante, presentó escrito de alegatos en los siguientes términos:

“Situaciones objeto de recurso:

1. Probada la afectación a los derechos laborales el despacho desestima las pretensiones económicas, por no tener solicitud o estar errada.

El despacho afirma que, si bien se dio por probado la existencia del contrato de trabajo, las violaciones a los derechos laborales del demandante, se prueba que la relación laboral se termina a causa del accidente de trabajo. La no manifestación de lo solicitado o su error en la formulación, no da lugar a ningún tipo de prestación económica a favor del demandante.

Igualmente, el despacho así lo entendimos manifiesta que se realizó alusión a una responsabilidad inmersa en el artículo 216 del CST, mas no se solcito expresamente lo que se deriva de esta omisión, dejando sin ningún beneficio al demandante.

En SL17741-2015, nos da una visión sobre esta situación, “*lura novit curiae, «al petente de justicia le basta solo invocar los hechos»*”, en materia laboral el juez debe aplicar las normas así no fueren mencionadas por las partes, “*además por ser el juez de primera tiene las facultades para fallar extra y ultra petita en materia laboral, Corte Constitucional sentencia C-662 de 1998*”.

“*Ordenar el pago de las pretensiones no da lugar al vicio procesal cuando quiera que el juez ordene el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condena al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. Tales facultades son las que la doctrina y la jurisprudencia reconocen como extra y ultra petita, y que se hayan contempladas por el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.*”

El despacho manifiesta un sin número de falencias que no se subsanaron dentro del proceso pero que fue admitido, aun así, se trató de cumplir con los requerimientos exigidos por el despacho, posterior a esto, en la primera etapa procesal por efecto de

excepciones de la demandada, el escrito de demanda se realizó de según las directrices del auto 092 de inadmisión.

Actuación que ajusto el proceso a las necesidades del despacho para poder realizar su evaluación jurídica y fáctica, a efectos de no sacrificar el fondo por la forma.

Dentro de la SL17741-2015, también nos trae la siguiente posición, “tal cual lo ordena el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que es tanto como decir que al juez compete resolver la controversia en conformidad con las normas que la regulan, a pesar de que no hayan sido citadas o acertadamente alegadas por las partes, por no estar el juzgador atado a éstas, sino, se repite, sólo a sus alegaciones fácticas.”

La demanda inicial con sus requisitos de admisión que fueron igualmente presentados para evitar su rechazo, manifiesta claramente que la intención del demandante es que se le realice su atención medica derivada del accidente de trabajo y que se le acredite el pago de unas sumas de dinero que fueron individualizadas como lucro cesante, igualmente se informó el porqué de la solicitud de montos por gastos emergentes sufragados por la conyugue, todo derivado del hecho causal, el accidente de trabajo.

Conclusión.

El despacho dio sentencia solo enfocado en los efectos dentro de la duración del contrato de trabajo, mas no en los efectos que genero el accidente de trabajo y sus consecuencias que a la fecha están latentes, lo que vulnera derechos derivados de la terminación sin justa causa del contrato, y los gastos que se generaron por no tener asistencia médica inmediata.

Así las cosas, le solicitamos señor Magistrado del tribunal de Antioquia se reconozca el recurso y acceda

1. A resarcir económicamente al demandante por parte del demandado, con base en los efectos del accidente de trabajo que debe sufragar el empleador por no tenerlo afiliado al sistema de seguridad social.
2. A conceder las pretensiones de la demanda
3. Que condene a costas procesales a la demandada.”

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

Interpretando los farragosos argumentos del recurso de apelación, considera la Sala que el problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si en este caso, la omisión de la demandada de afiliar al actor al sistema de seguridad social en riesgos laborales, acarrea para ella la obligación de pagar al accionante los perjuicios generados como consecuencia del accidente laboral que sufrió, y si hay lugar a ordenar la evaluación del actor por la disminución derivada de dicho accidente de trabajo.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

6. CONSIDERACIONES:

La decisión del recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, se proferirá atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, referente al principio de consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad al sustentarse el referido recurso.

Sea lo primero señalar que, en cuanto a la carga probatoria, el artículo 167 del CGP dispone que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”*

De otra parte, en los juicios de trabajo resulta de fundamental importancia establecer la existencia del contrato de trabajo entre las partes, como fuente de la cual devienen los derechos laborales que se reclaman.

En el presente caso, no es motivo de discusión la relación laboral que tuvo el demandante NELSON DE JESÚS PUERTA con la señora MARÍA ELSY RESTREPO DE TOBÓN, pues el juez de instancia declaró la existencia del contrato de trabajo por obra o labor determinada, entre el 15 de febrero y el 7 de marzo de 2016, ordenando además el pago de los aportes al sistema pensional, durante dicho lapso, declaración que no fue motivo de apelación por ninguna de las partes.

Pues bien, de entrada la Sala advierte que comparte las apreciaciones realizadas por el *a quo*, respecto de lo confuso de las pretensiones de la demanda y los fundamentos en que se basan las mismas, pues a pesar de los correctivos que trató de realizar el

Despacho de primera instancia, siguieron existiendo falencias en la subsanación a la demanda, sin embargo, tal desatino no da al traste con lo actuado y por el contrario, es posible emitir sentencia de segunda instancia, respecto de lo pretendido por el actor, interpretando el enredo de la apelación.

Dicho lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, es preciso poner de presente que, una vez declarada la relación laboral, surgen en el empleador diversas responsabilidades, entre ellas, la obligación de responder por las contingencia que su omisión de la afiliación al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales, le impidió acceder a las prestaciones asistenciales y económicas de estos sistemas, y pagar las respectivas cotizaciones al sistema pensional, pues el incumplimiento del deber de afiliación y de sufragar las correspondientes cotizaciones, genera para el empleador la responsabilidad en el pago de las prestaciones en los términos que las habría concedido el sistema de seguridad social.

Con respecto a la obligatoriedad legal de afiliación del empleador a sus trabajadores al sistema de seguridad y al pago de los aportes, inicialmente resulta oportuno citar el artículo 15 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que obliga a los empleadores a afiliar al sistema de pensiones a sus trabajadores y en desarrollo de dicha obligación, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 dispuso que, durante la vigencia de la relación laboral, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias entre otros, al régimen de riesgos laborales, para cubrir las contingencias de enfermedad o accidente laboral.

De lo intrincado de la apelación, se entiende, que el apoderado del actor reclama, prestaciones o indemnizaciones, originadas en un accidente de trabajo que afirma haber sufrido el demandante mientras laboraba para la demandada.

No obstante, los perjuicios que pretende el demandante origine condena a la accionada, son los establecidos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, así lo dejó claro en el memorial mediante el cual subsanó la demanda, obrante a partir del folio 42 del archivo N°5 del expediente digital de primera instancia. En atención a lo anterior, se hace necesario indicar que la citada disposición legal, establece lo siguiente:

“ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del {empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por

perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.”

Ello significa que, para que exista **“culpa suficiente comprobada del empleador”**, se debe demostrar la culpa del empleador en el accidente de trabajo o enfermedad sufrida por el trabajador, correspondiéndole a este la prueba no solo del accidente, sino de la culpa del empleador, que no deje duda alguna.

En este contexto, la demostración de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios exige la prueba de: **I)** daño originado por causa o con ocasión del trabajo; **II)** la culpa suficientemente comprobada del empleador, y **III)** el nexo de causalidad entre el daño y la culpa, sin que ninguno de esos elementos sea susceptible de presumirse legalmente, pues no existe una norma en el esquema de responsabilidad subjetiva de culpa probada que así lo indique. (CSJ SL14420-2014).

Con respecto a la culpa del empleador, es del caso indicar que su naturaleza es eminentemente subjetiva e implica que se demuestre el incumplimiento de sus deberes de protección y seguridad establecidos en los artículos 56 y 57 inciso único numeral 2 ibídem, que le exigen tomar las medidas adecuadas en atención a las condiciones generales y especiales del trabajo para evitar que el empleado sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos propios del trabajo.

Nótese entonces como la norma en mención, hace alusión a que quien pretenda obtener la indemnización plena de perjuicios derivada de dicha disposición, debe demostrar en primer lugar, la ocurrencia de un accidente o enfermedad de tipo laboral y que esta se produjo en cumplimiento de las órdenes del empleador, es decir, que es el trabajador quien debe demostrar el proceder culposo del empleador, en la desatención de sus deberes de protección y seguridad al trabajador.

En el presente caso, en los hechos y pretensiones de la demanda, se menciona de un accidente de trabajo, sin embargo, no se demuestra la ocurrencia de un suceso de esta naturaleza, lo que de suyo impide estudiar, cualquier pretensión derivada de un accidente de trabajo.

Y es que, de los argumentos, de hecho de la demanda y de las pretensiones, se extrae que lo que se busca es la reparación de perjuicios derivada de la falta de afiliación de la empleadora a la seguridad social en riesgos laborales, hecho que es totalmente ajeno a la responsabilidad que deviene de la norma en cita, de manera que, al no haberse demostrado, ni alegado la ocurrencia de un accidente de trabajo en los términos anteriormente expuestos, no puede prosperar la condena al pago de la

indemnización plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del CST.

De otro lado, aduce el recurrente en la alzada, que el accionante tiene una disminución derivada del accidente que debería ser evaluada con el fin de tener una remuneración por ello, sin embargo, lo cierto es que la parte actora tampoco se esmeró en aportar un dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral que diera cuenta de la real condición de salud del demandante y el origen de la misma, pues en el proceso solo obra una historia clínica de atención en salud que recibió el actor por accidente con fractura de clavícula, pero sin que obra en el expediente, la más mínima prueba de las circunstancias en que se produjo el accidente que causó la fractura de clavícula, de manera que su solicitud se basa en un supuesto de una eventual Pérdida de Capacidad Laboral de origen laboral, sin que la misma fuera acreditada por ningún medio probatorio, razón por la cual, cualquier pretensión derivada de la supuesta disminución, no puede salir adelante.

Finalmente, dice el apelante que el actor no tuvo acceso a los montos indeterminados por la evaluación médica. Frente a este punto, debe decir la Sala en primer lugar, que no se entiende a qué hace referencia la parte actora cuando habla de montos indeterminados o gastos indefinidos en la demanda, sin embargo, es preciso poner de presente, que cuando se inadmitió la demanda en primera instancia, se requirió al apoderado del actor, para que precisara la pretensión cuarta que hacía referencia a dicho pedimento, y que además indicara los fundamentos y razones de derecho, no obstante, con la subsanación de la demanda, renunció a dicha pretensión, por lo que en ese sentido, no podía el apoderado del accionante en el recurso de alzada, traer a colación nuevamente dicha pretensión, ya que él mismo la excluyó del proceso, máxime que ni siquiera explica en qué consiste la solicitud que hace o cuál es el fundamento jurídico en que basa la misma.

Lo explicado, es suficiente para determinar que en este caso no hay razones que permitan a esta Sala tomar una decisión diferente a la que arribó por la *a quo*, debiéndose CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto absolvió de las pretensiones de la demanda, distinta a la que se produjo la condena.

Costas en esta instancia a favor de la demandada, y a cargo del demandante, por haber resultado vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada del 18 de enero de 2022 proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALDAS, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, promovido por el señor **NELSON DE JESÚS PUERTA**, contra la señora **MARÍA ELSY RESTREPO DE TOBÓN**.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la demandada. Las agencias en derecho las fija el ponente en la suma de \$1'160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **796265fb418ee20073531357312423ada2a973632f155fc8ef50411a2167ac5a**

Documento generado en 14/12/2023 10:00:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>